



Íconos. Revista de Ciencias Sociales
ISSN: 1390-1249
revistaiconos@flacso.org.ec
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
Ecuador

Latorre, Sara; Santillana, Alejandra
Capitalismo estatal o convergencias populares
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 34, mayo, 2009, pp. 13-18
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50911338001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Capitalismo estatal o convergencias populares

State Capitalism or Popular Convergences

Sara Latorre

Ambientóloga, máster en Estudios Socioambientales de FLACSO-Ecuador.

Correo electrónico: botigete@gmail.com

Alejandra Santillana

Socióloga, miembro de la Casa Feminista de Rosa.

Correo electrónico: alesantillana@hotmail.com

Fecha de recepción: marzo 2009

Fechas de aceptación y versión final: marzo 2009

Resumen

Este artículo analiza las interacciones entre el Gobierno actual y el movimiento anti-minero para el periodo 2006-2009, bajo la hipótesis de que el modelo neodesarrollista adoptado por el primero ha generado un nuevo escenario de conflictividad social, donde la correlación de fuerzas está signada por la abrumadora popularidad del Gobierno, por un lado, y por otro, por los problemas de organización, direccionalidad y estrategias que han dificultado la consolidación y fortaleza del movimiento anti-minero.

Palabras clave: minería, resistencia, movimiento anti-minero, CNDVS, FRESMIGE, Ecuador

Abstract

This article analyses the interactions between the current government and the anti-mining movement between 2006 and 2009. The main hypothesis of the article holds that the neo-developmental model adopted by the government has given way to new forms of social conflict. On the one hand, the nature of this social conflict is marked by the overwhelming popularity of the government. On the other hand however, the anti-mining movement has been weakened by problems related to its organization, leadership and strategies, which have, in turn, prevented its consolidation.

Keywords: mining, resistance, anti-mining movement, CNDVS, FRESMIGE, Ecuador

Conflictos mineros y procesos de resistencia

La minería metálica a gran escala hasta el momento ha tenido una incidencia mínima en el Ecuador, no así la minería a pequeña escala¹ que se ha concentrado en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro principalmente. Este escenario empieza a cambiar a inicios del año 2000, cuando se produce un incremento de las actividades de exploración por parte de empresas trasnacionales. Esta tendencia responde, por una parte, a las políticas mineras desarrolladas desde la década de los 80 y caracterizadas por la liberalización de los controles estatales y la simplificación de los mecanismos y los procedimientos con el fin de atraer la inversión extranjera; y por la otra, a los altos precios de los metales registrados en el mercado internacional (Sandoval 2002:462)

Los principales yacimientos metálicos se encuentran en las estribaciones oriental y occidental de la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de El Cóndor. Regiones con una alta biodiversidad y fragilidad ecosistémica, territorio de pueblos indígenas y campesinos, y donde tienen origen innumerables cuencas hídricas. Esta geografía minera es el escenario de diversos conflictos socioambientales, algunos de larga data, que adquieren niveles críticos a finales del año 2006; lo que propicia el apareamiento de un movimiento anti-minero nacional a inicios del 2007, en un contexto político marcado por la elección presidencial de Rafael Correa, de tendencia progresista y

quien enarbola un discurso ambiental explícito como parte de su propuesta política².

Analizaremos las interacciones entre el Gobierno actual y el movimiento anti-minero para el periodo 2006-2009, bajo la hipótesis de que el modelo neo-desarrollista ha generado un nuevo escenario de conflictividad social, donde la correlación de fuerzas está signada por la abrumante popularidad del Gobierno.

Evolución de la conflictividad minera

Desde el 2000 hasta el 2006 se va incrementando la conflictividad social como consecuencia del inicio de las explotaciones en muchos proyectos mineros y del trabajo de sensibilización y socialización de personas claves³ que permitieron visibilizar la realidad minera como problemática. En este periodo, la resistencia puede caracterizarse como una lucha aislada, con poca presencia en los medios de comunicación y con el predominio de las acciones directas por parte de la sociedad civil organizada⁴. Es en el sur de la Amazonía don-

1 La actividad minera a pequeña escala es una de las tres subcategorías de lo que tradicionalmente se ha denominado pequeña minería. Ésta se define como actividad extractiva legalmente constituida sobre una concesión máxima de 150 hectáreas mineras, con incorporación de tecnología mediana, cuadros profesionales, procesos de planificación productiva, volúmenes de mineral extraído de hasta 100 toneladas métricas diarias, cultura empresarial, una inversión de hasta un millón de dólares americanos, medidas básicas de prevención y control de la contaminación. Las otras dos categorías se refieren a la minería artesanal y de subsistencia (Sandoval 2002:446).

2 En los meses previos a la Asamblea Constituyente, el presidente Correa impulsó iniciativas como la preservación del crudo del bloque petrolero ITT. Asimismo, el Presidente en varias visitas a las comunidades afectadas por actividades mineras, prometió impedir la actividad minera en fuentes hídricas o en ecosistemas frágiles (entrevistas a dirigentes de organizaciones de base).

3 Destaca el trabajo del Padre Juan de la Cruz, sobre todo con el pueblo Shuar, y de personas como Gloria Chicaiza y Luis Suárez, de Acción Ecológica, con la población colona. También cabe mencionar el trabajo de organizaciones sociales locales como la Coordinadora Campesina Popular.

4 Como principales conflictos en la región andina durante este período, tenemos los acontecidos en las provincias del Azuay y Cañar; concretamente en Molleturo, Victoria del Portete-Tarqui y en la zona de Santa Isabel-Girón, respectivamente. En la Amazonía, se producen conflictos en territorio Shuar con las empresas mineras Ecuacorriente Resources y Lowell Mineral; así mismo los conflictos con población colona en la zona fronteriza entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe donde se sitúa el proyecto Mirador, también de la empresa Ecuacorriente Resources.

de, a raíz de un conflicto con la empresa hidroeléctrica Hidroabánico S. A., se visibilizan los vínculos entre hidroeléctricas y proyectos de minería a gran escala, pues este tipo de actividad requiere de un alto consumo de energía eléctrica, sobre todo en su fase de explotación. A partir de este conflicto se constituye un proceso de resistencia campesino-indígena, cuyo principal objetivo es el rechazo a las empresas transnacionales mineras que operan dentro de sus territorios. Poco a poco se va configurando un discurso anti-imperialista que defiende la soberanía territorial y las formas de vida locales, pero que no llega a cuestionar la factibilidad o no de la actividad minera, una vez recuperada la soberanía como eje del desarrollo local. Este periodo culmina con la toma de tres campamentos mineros en territorio Shuar⁵ y con fuertes enfrentamientos entre la población y los militares cerca del campamento de ECSA (Ecuacorrientes S.A.), en el sector del Pangui, donde hubo 17 personas detenidas por FFAA, quienes sufrieron agresiones físicas y psicológicas⁶. Estos procesos de resistencia de carácter espontáneo irán convergiendo, a inicios del 2007, en la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS). Esta instancia surge por la necesidad de articular la lucha y ganar legitimidad y poder frente al Estado. Sin embargo, este movimiento nacional se estructura sin definir previamente su forma organizativa interna y sin consensos mínimos sobre hacia dónde direccionar la unidad y sus estrategias. Estas limitaciones tienen como consecuencia diversos acontecimientos:

a) la CNDVS se estructura a partir de un marcando “centralismo democrático”⁷, bajo el liderazgo de la Coordinadora Campesina Po-

pular. Ésta irá imponiendo su proyecto político asentado en los principios de autonomía, anticapitalismo, anti-imperialismo y clase, lo cual genera una disputa de liderazgos dentro de la propia organización, y con el movimiento indígena ecuatoriano (MIE). La CNDVS no plantea una alianza con el MIE, al no considerarlo “sujeto emancipatorio”⁸.

b) Se establece como demanda general la prohibición de la minería metálica a gran escala, pero se deja sin discutir aspectos como la minería a pequeña escala o la posibilidad de una minería industrial estatal. Ello, dificultará interpelar al Gobierno con un discurso unificado y repercutirá también, en las estrategias adoptadas frente a la propuesta gubernamental.

c) Las promesas electorales del presidente Correa en relación a la prohibición de la minería a gran escala, la no realización de actividades extractivas en zonas con fuentes hídricas ni áreas protegidas, así como el nombramiento de varias personas con una trayectoria de compromiso con los movimientos sociales en cargos públicos, hacen que muchos sectores disminuyan su radicalidad contra el Gobierno e inicien procesos de diálogo. Situación que creará rupturas dentro de la CNDVS entre quienes adoptan esta nueva postura de diálogo con el fin de ver hasta dónde pueden llegar los procesos de concertación patrocinados por el Gobierno y aquellos que insisten en romper relaciones con el aparato institucional y radicalizar la lucha a través de medidas de hecho. Así, un quiebre importante dentro del movimiento anti-minero surge del desacuerdo respecto a continuar o no con las medidas de

5 Lo que los Shuar denominaron “limpieza de nuestro territorio de las mineras”, y operó durante el mes de noviembre 2006.

6 Entre ellos el diputado por la provincia de Zamora, Salvador Quishpe, perteneciente al partido político Pachakutik.

7 Centralismo democrático caracterizado por la verticalidad de la Coordinadora Campesina Popular cuya

mayor representante es Lina Solano, socióloga de Limón-Indanza, de tendencia política maoísta.

8 Ello se evidencia en los diversos boletines de prensa del CNDVS, donde sus demandas no incorporan las reivindicaciones hechas por el movimiento indígena, incluso las realizadas por los Shuar a nivel regional, produciéndose un total desconocimiento a las luchas indígenas en este campo.

hecho y movilizaciones planificadas para el 21 de abril en apoyo de la aprobación del Mandato minero establecido por la Asamblea Constituyente, el cual recogía gran parte de las demandas planteadas por las organizaciones. Mandato que fue aprobado el 18 abril, es decir, 3 días antes de que entren en efecto las medidas de presión convocadas por la CNDVS. Finalmente, la Organización se resolvió a favor de las medidas de hecho, pero algunas de sus agrupaciones de base no se adhirieron; suceso después del cual, se produce distanciamientos entre la CNDVS y algunos de sus miembros.

Los factores descritos provocarán que en tres meses se fragmente el movimiento anti-minero y surjan otras plataformas de lucha, las cuales hasta el momento no logran converger. En septiembre del 2007 surge el Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala (FRESMIGE), que aglutina organizaciones de las provincias de El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Frente en el que confluyen muchos de los actores sociales que salen de la CNDVS. Ésta nueva agrupación adopta estructuras más horizontales pero igualmente se configura bajo las directrices de Salvador Quishpe, cuyas demandas representan principalmente a los pequeños mineros. Este actor empezará a establecer relaciones con el MIE, obligándolo a tomar partido en esta lucha.

Ya en abril del 2008, se realiza un último intento de reunificar el movimiento bajo el paraguas de lo que se denominó Asamblea de los Pueblos. Se buscaba concertar las acciones y las demandas de todas las organizaciones y actores sociales, no sólo afectados por la minería, sino de todos los sectores afectados por las consecuencias del modelo de desarrollo establecido por el Gobierno. Estratégicamente se pensó que ello podría subir el nivel del debate y pasar de demandas sectoriales a una discusión integral en torno al modelo de desarrollo, y con la esperanza de tejer alianzas fuertes. Esta iniciativa tuvo cierta acogida durante el proceso de formulación del proyecto de Ley

minera; sin embargo, ha ido perdiendo fuerza, una vez aprobada ésta, con muy pocos logros para el movimiento anti-minero.

En este contexto, el Gobierno actual mantiene una disputa interna entre la implementación de un modelo neodesarrollista y, un aún incierto, socialismo del siglo XXI. Este neodesarrollismo se caracteriza por una política fiscal de reordenamiento; el refuerzo de una dinámica exportadora basada en la explotación de recursos naturales y la concentración del ingreso; la ampliación del consumo de sectores sociales populares y medios, mediante la entrega de subsidios y la alianza con sectores industriales nacionales; además de asumir que la revitalización de un capitalismo latinoamericano implica la existencia de un contexto de desarrollo multipolar que facilite procesos de acumulación en América Latina (Katz, 2006). Como sostiene Unda (2008), este tipo de modelo no nacionaliza los recursos sino que genera marcos legales para negociar de mejor manera con el capital transnacional, pero sobre todo, el neodesarrollismo ubica al neoliberalismo como enemigo principal, dejando de lado el debate sobre una sociedad postcapitalista, y subordinando los intereses gremiales, nacionales y de las organizaciones a la superación del neoliberalismo. Aun cuando esta superación construya un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y en la pérdida de poder de las organizaciones en la configuración de la democracia.

Esto además implica una serie de mecanismos de participación y de concepciones de la política anclados en una idea de Estado y de sociedad civil. Desde el retorno a la democracia, fueron los nuevos partidos políticos creados por el aparato de Estado, que al convertirse en organismos electorales (Moreano, 1983:175), impidieron que la confrontación política tuviera lugar en el ámbito social, alojándose exclusivamente en el espacio estatal. Son los movimientos sociales y sobre todo, el MIE en los años 90, los que van configurando esferas públicas no estatales y esferas públicas

alternativas (Fraser 1997), tanto en sus estrategias de posicionamiento a través de la movilización como a través de la construcción de gobiernos locales alternativos.

Actualmente, en un formato distinto al de los partidos políticos y en un contexto de debilidad y crisis de las organizaciones sociales, la disputa de lo político se reconcentra en la esfera pública estatal, estatizando la participación social. A esto se suma la concepción que tiene el Gobierno sobre el Estado, respecto a su descorporativización. Innumerables veces el Presidente ha declarado que en el país existen mafias que han usufructuado del Estado para sus intereses privados. Sin embargo, el Gobierno no ha hecho distinción entre los actores sociales y los actores políticos, y considera que el Estado no debe acoger los derechos y demandas particulares de las organizaciones populares porque sería un acto de “privilegio e injusticia”⁹. Bajo este esquema, el movimiento ecologista popular sería parte de los sectores históricamente privilegiados y por tanto, sus propuestas y demandas se desestiman por no provenir de una la esfera pública estatal.

Conclusiones

Hasta la fecha lo que se observa en distintos ámbitos es:

A nivel económico, un giro radical por parte del Gobierno, hacia la profundización de un modelo neodesarrollista y extractivista, que prioriza las economías de enclave por encima de las economías locales, bajo una especie de “capitalismo estatal”, y donde las organizaciones y poblaciones locales afectadas por la minería a gran escala, serían externalidades negativas de este supuesto “consenso nacional”. Si la apuesta aparente del Gobierno es la minería a gran escala y la cercanía con grupos del capitalismo nacional, ¿en qué marco global, el Ecuador podría salir ganando y a costa de quienes?

9 “Gobierno no se va a someter al poder de ninguna ONG”. *Ecuador Inmediato. com*, 12 marzo 2009.

Por su parte, el movimiento anti-minero surge como reacción al anuncio de la implementación de la minería a gran escala. Su falta de experiencia política se refleja en la ausencia de un discurso unificado y aglutinador, en su imposibilidad de articulación a partir de formas organizativas más horizontales y en su incapacidad de establecer alianzas con otros sectores, como el MIE. Si el movimiento anti-minero no consigue esclarecer las implicaciones sociales y ambientales de las economías extractivas para el interés nacional, difícilmente podrá cambiar el balance de fuerzas.

En lo político, el actual modelo plantea: a) desconocimiento y ausencia de memoria de las contribuciones de las organizaciones y los movimientos sociales en la construcción de proyectos distintos de comunidad política; b) deslegitimación de las estrategias y mecanismos de los actores sociales para plantear sus demandas, derechos e identidades¹⁰; c) a pesar de la inclusión progresista de los derechos de la naturaleza y el derecho al acceso al agua en la actual constitución, hay un proceso de desmantelamiento de algunos de los derechos colectivos¹¹; d) la política desde el Gobierno es entendida como un espacio *a priori* de supuestos consensos nacionales sobre mecanismos de participación y propuestas de desarrollo; y e) la democracia representativa y consultiva surge como el principal espacio de la participación y del poder popular, desconociendo formas, dinámicas y espacios de democracia participativa, co-gestión, co-planificación y esferas de debate¹². Cada uno de estos elementos forma parte de un camino de distancia, deslegitimación e incomprensión del Gobierno en relación a las organizaciones sociales.

10 Por ejemplo, juicios contra campesinas y campesinos en el sur del país, quienes en el paro minero del 5 de enero del 2009 salieron a protestar contra el actual modelo de desarrollo.

11 Este es el caso de la inexistencia de una progresividad en derechos como el de la consulta previa.

12 Estas dinámicas democráticas han existido en el país, sobretudo, a raíz de los gobiernos locales alternativos inaugurados por el MIE.

Finalmente, la concepción de ciudadanía que promueve el Gobierno implica una esfera consultiva a la población ecuatoriana, pero también un conjunto de relaciones donde la posibilidad de crítica y recuperación de la memoria social de las últimas décadas se ven limitadas por relaciones de obediencia concentradas en una esfera pública estatal.

Bibliografía

- Fraser, Nancy, 1997, *Justicia Interrupta, Reflexiones críticas desde la posición "postsocialista"*, Siglo Hombre Editores, Bogotá.
- Katz, Claudio, "Socialismo o Neodesarrollismo", *Aporrea.org*, 30 noviembre 2006. Disponible en <http://www.aporrea.org/trabajadores/a27733.html> (visitada 03/2009).
- Moreano, Alejandro, "La Tautología del Poder y el Lenguaje del Pueblo", en José Moncada y otros, *Ecuador Presente y Futuro*, Editorial El Conejo, Quito.
- Sandoval, Fabián, 2002, "Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en el Ecuador", en Equipo MMSD, *Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en América del Sur*, IIED- WBCSD, s/l.
- Unda, Mario, 2008, *¿Qué es lo que está en juego?*, Inédito.